

Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veinte.

Vistos:

Se confirma la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones San Miguel, en el Ingreso Corte N° 102-2020.

Se previene que el Ministro Sr. Künsemüller, concurre a confirmar el fallo apelado, teniendo especialmente presente que la procedencia de la acción de amparo requiere una amenaza o perturbación ilegal, esto es, antijurídica a la libertad ambulatoria, requisito que no se advierte en este caso.

Acordado con el voto en contra de los Ministros Sres. Brito y Dahm, quienes estuvieron por revocar la resolución apelada y acoger la acción por los siguientes fundamentos:

1° Que la norma de aplicación general prevista en el artículo 36 del Código Procesal Penal dispone que todas las resoluciones judiciales que se dictaren, con excepción de aquellas de “mero trámite”, deben ser fundamentadas, esto es habrán de entregar los hechos y las razones jurídicas que las justifiquen. Por su parte el artículo 122 del mismo código, al regular las medidas cautelares, previene como norma basal que todas estas medidas “serán siempre decretadas por medio de resolución judicial fundada”. El artículo 143 del citado código, al regular la prisión preventiva señala que al concluir la audiencia respectiva, esto es la de formalización, “el tribunal se pronunciará sobre la prisión preventiva por medio de una resolución fundada, en la cual expresará claramente los antecedentes calificados que justificaren la decisión.”

2° Que, en concordancia con lo anterior, para que el juez pueda decretar la prisión preventiva, el solicitante -Ministerio Público o querellante- deberá justificar la procedencia de lo pedido a consecuencia de concurrir los requisitos contemplados en las letras a), b) y c) del artículo 140 del Código Procesal Penal, debiendo el tribunal detallar las circunstancias fácticas y las razones jurídicas del tipo de cautela que se otorgue, las que habrán de derivar de los antecedentes de que se dispusiere, esto es de información objetiva relacionada con el obrar del



imputado, lo cual se requiere para resolver la aplicación de las normas que previenen en abstracto el instituto cautelar como lo demanda el artículo 143 del ya citado cuerpo legal.

3° Que para decretar la prisión preventiva de los amparados y dar por concurrentes los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal, la Corte recurrida expresó: *“Que del mérito de lo expuesto por los intervinientes en esta audiencia y los antecedentes remitidos a esta Corte, atendido el principio de objetividad y, al tenor de los hechos ocurridos el día tres de marzo en curso, mediante el cual existió una alteración de la tranquilidad y seguridad de la población viéndose involucrados en estos hechos todos aquellos por los que concurren las defensas, fueron detenidos en el momento mismo de ocurrencia de estos eventos, descritos en la formalización, en plena vía pública donde se desarrollaban, turbándose la tranquilidad del lugar y vulnerándose también garantías constitucionales del resto de la población, en los términos previstos en los artículos 269 y 268 Septies del Código Penal, haciendo procedente la revocación de lo resuelto por la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago”* y disponiéndose en su lugar la medida cautelar de prisión preventiva para todos los recurrentes.

4° Que, a juicio de los disidentes la resolución impugnada recién transcrita incumple las exigencia legales de justificación de la cautelar de prisión preventiva, porque no consigna razonamientos particulares, esto es, los pertinentes a cada uno de los recurrentes de amparo y que conduzcan a alcanzar convicción respecto al motivo que autoriza la cautela ordenada, al omitir el análisis sobre los extremos que exige el artículo 140 del Código Procesal Penal para su procedencia, al menos en relación al requisito de la letra c), resolución en la que no basta efectuar referencias generales respecto a las circunstancias fácticas de la formalización, pues esta decisión jurisdiccional precisa del señalamiento de situaciones personales de cada uno de los imputados, modo que en el presente caso ha sido omitido.



5° Por estos fundamentos, encontrándose afectada la libertad personal, por no haberse producido el debido examen de la cuestión debatida, teniendo para ello en consideración, que la falta de fundamentación torna ilegal la cautelar de prisión preventiva decretada, situación que autoriza a solicitar el amparo constitucional, atendido los razonamientos que preceden, por aparecer de manifiesto que la resolución impugnada por el presente recurso de amparo, revocatoria de la que denegó la prisión preventiva de los amparados disponiendo, de contrario, dicha medida cautelar, carece de fundamentos que justifiquen la concurrencia de los requisitos para otorgarla.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 30.558-2020.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Lamberto Cisternas R., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O. Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veinte.

En Santiago, a veinticinco de marzo de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

